

¿Hacia dónde va el “welfare”?

por

Jorge A. Sanguinetti

Cuando alguien le pide una limosna, usted probablemente se pregunta, antes de dársela, si la persona está realmente necesitada o si es alguien que pudiera trabajar y vive del cuento. Al dar la limosna, puede que se la haya dado a alguien que no la necesita o merece. Si la niega, puede que se lo haya hecho a alguien verdaderamente necesitado. La administración de un programa como el *welfare*, se enfrenta, igual que usted, a la misma disyuntiva en cada caso que examina.

El sistema actual de asistencia social en Estados Unidos es sumamente liberal por haber sido sumamente rico en un país sumamente generoso. Como resultado, llegó a aceptar entre sus beneficiarios a muchos individuos y familias enteras que dejaron de trabajar para vivir a costa del Estado y, por ende, del trabajador contribuyente que lo financia mediante el pago de sus impuestos. Ahora, después de más de seis décadas de vigencia, dicho programa está siendo sujeto a una profunda revisión que, al mismo tiempo, representa una de las iniciativas legislativas más revolucionarias de Estados Unidos en muchos años.

Dos son los objetivos centrales de los cambios que se plantean, reducir el gasto público y el déficit del gobierno, y eliminar los abusos, haciendo que aquéllos que puedan trabajar así lo hagan, separándolos de los verdaderamente necesitados. Los cambios van a afectar radicalmente a millones de personas en el país y a muchas decenas de miles en nuestra comunidad. También se verá grandemente afectado el modo en que los nuevos programas serán administrados, pasando la administración del gobierno federal a los respectivos gobiernos estatales.

Uno de los cambios que se plantean es el disminuir el gasto total en los *food stamps* (cupones de alimentos) en unos \$23,000 millones durante los próximos seis años. Esta reducción se llevaría a cabo bajando la contribución actual de 80 centavos por comida y por persona a 66 centavos. Otro cambio importante es el de cancelar todos los beneficios de asistencia social a todos los inmigrantes legales, o sea a los que no sean ciudadanos de Estados Unidos, o a los que aún no siendo ciudadanos, no hayan trabajado aquí por lo menos 10 años. La ley también crea registros que servirán para forzar a los padres divorciados a mantener a sus hijos, cancelándoles sus licencias de conducir cuando no lo hagan.

Igualmente, la nueva ley obligaría a la mitad de las madres solteras que reciben asistencia social a que trabajen antes del año 2002. Además, muy pocos podrán recibir asistencia federal por más de cinco años adicionales, aunque los estados podrán suministrar asistencia posteriormente, dependiendo del caso. Los estados tendrán mucha libertad para diseñar los nuevos sistemas de asistencia social, los cuales se diferenciarían entre sí de acuerdo con sus necesidades y preferencias de política pública.

Se puede suponer que los cambios, por lo menos algunos de ellos, serán paulatinos y no se implantarán abruptamente. Además, las personas verdaderamente necesitadas, bien por incapacidad o por su edad,

no se verán lanzadas a la miseria, aunque sería mejor que fueran ciudadanas de Estados Unidos cuando los cambios ocurran. Pero, las personas que hoy dependen del *welfare* y pueden trabajar, aún cuando sean madres de niños pequeños, deben prepararse para llevar una vida más productiva.

Muchas incógnitas yacen en el camino. No se sabe qué capacidad tendrá la economía de los estados de generar los empleos necesarios para reducir la asistencia social. Tampoco se conoce cuántos de los actuales beneficiarios reponderarán a los nuevos incentivos para trabajar, aún cuando existan las oportunidades. Otra problemática es si bajará el número de nacimientos de hijos de madres solteras que parece haber sido estimulado hasta ahora por una disponibilidad fácil de asistencia. Otra duda es si el nuevo sistema será capaz de reducir la pobreza en el país, incentivando al trabajo en lugar de crear una dependencia crónica de los subsidios.

Los críticos de la ley esgrimen estas y otras dudas sobre los futuros impactos de la misma. Sin embargo, hay suficiente evidencia de que el sistema vigente ha logrado un objetivo contrario al esperado durante la administración del presidente Roosevelt: la reducción de la pobreza. Por otra parte, no creo que exista un procedimiento analítico para determinar *a priori* las consecuencias precisas de los cambios propuestos. Por lo tanto, creo que es hora de implantar los cambios y vigilarlos muy de cerca en cada estado.

El gran desafío radica en que no se pierda la noble esencia de la asistencia social: ayudar al desvalido y no al vivo. Por cada dólar que equivocadamente vaya al que puede trabajar, hay un dólar adicional que éste deja de crear con su trabajo, por lo tanto, la sociedad se empobrece. Es un deber ciudadano velar por que las nuevas administraciones estatales del *welfare* estén en manos de funcionarios capaces y honrados, liberadas de las influencias políticas que puedan corromperlas. El altruismo tiene que ser competente para no conducir a la pobreza. ¿O es que no conocen la historia de Viridiana?

Agosto de 1996